

Venezuela, entre el radicalismo y la negociación¹

Arturo Sosa A., S.J.

Los acercamientos simplistas
alimentan salidas expeditas
o soluciones mágicas a situaciones
imposibles de entender
si se prescinde del proceso histórico
y las múltiples variables que conforman
la vida de un país.
Sólo desde la comprensión
de la densidad de los procesos
es posible formular alternativas
de solución.

A propios y extraños se nos hace muy difícil explicar cómo ha llegado la sociedad venezolana a la actual situación de crisis general que no podemos sino ver con dolor y tristeza. Una de las consecuencias de la polarización de la sociedad es la abundancia de respuestas simplistas a esa interrogante. Cualquier "explicación" de la realidad actual que renuncie al pensamiento complejo no puede dar cuenta de la realidad ni, por tanto, iluminar alternativas reales de superación de la crisis.

Lo que a lo largo de estas semanas ha vivido la sociedad venezolana es un nuevo episodio de un prolongado período de transformación de las bases de la convivencia, producto de la pérdida de legitimidad del régimen político instaurado en 1958 para sustituir la dictadura militar, que suscitó un profundo deseo de cambio en todos los grupos y actores sociales, orientado a profundizar la democracia y el desarrollo integral, cuyos primeros pasos se habían experimentado y se percibían claramente sus posibilidades. Producir un cambio real exige una conversión de la cultura política sustentada en el rentismo petrolero, el infantilismo populista y la sustitución de la participación ciudadana por líderes de partido. Una sociedad productiva de ciudadanos responsables de las decisiones del Estado es el núcleo del horizonte del cambio que sólo puede alcanzarse desde el reconocimiento de la pluralidad y complejidad de la realidad venezolana.

¹ Este texto se terminó de redactar el 9 de Enero de 2003 en medio de una situación muy fluida que puede haber cambiado cuando llegue a manos de sus lectores.

Producir un cambio real exige una conversión de la cultura política sustentada en el rentismo petrolero, el infantilismo populista y la sustitución de la participación ciudadana por líderes de partido. Una sociedad productiva de ciudadanos responsables de las decisiones del Estado es el núcleo del horizonte del cambio que sólo puede alcanzarse desde el reconocimiento de la pluralidad y complejidad de la realidad venezolana.

Sin embargo, el pensamiento simplista prevaleciente en estos meses ha convertido los esquemas interpretativos de los sucesos de Abril 2002² en la óptica exclusiva de interpretación de lo que viene ocurriendo en Venezuela desde Octubre de ese mismo año³. Para el Gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan lo que sucede no es otra cosa que una nueva fase de la estrategia golpista de los enemigos de las transformaciones democráticas que encarna el proyecto de Hugo Chávez. Para la Coordinadora Democrática y otros voceros de la oposición (Confederación de Trabajadores de Venezuela-CTV-, Fedecámaras), por el contrario, estamos en otro momento de la estrategia chavista de imponer una revolución izquierdista, rechazada por la mayor parte de la población, para lo cual se está dispuesto a utilizar incluso la violencia.

El resultado es que la sociedad venezolana se mueve entre dos cursos de acción que hemos denominado *salida institucional* y *transición dictatorial*⁴. En la presente coyuntura cualquier *salida institucional* está asociada al éxito de la Mesa de Negociación y Acuerdos, producto de una larga y compleja negociación propiciada por el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA), con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que incluyó visitas del ex-Presidente de los Estados Unidos y del Secretario General de la OEA, además del intenso trabajo de sus equipos técnicos.

Desde Abril sigue abierta la posibilidad de una confrontación entre los polos políticos que dividen al país que nos llevaría hacia alguna forma de dictadura. La confrontación pretende vencer o eliminar al polo contrario, percibido y tratado como "enemigo" más que como adversario político con el que se puede convivir. Según sea el vencedor se daría lugar a una dictadura encabezada por Hugo Chávez, con el consiguiente aceleramiento de la puesta en práctica de su proyecto o, de lo contrario, una dictadura de las fuerzas opositoras para restaurar el orden social y echar a andar un programa de desarrollo inspirado en los esquemas del liberalismo occidental. La alternativa de confrontación trae aparejada una dosis de violencia cuyos costos en vidas humanas y división social son imprede-

cibles. ¿A quién puede interesarle este curso de acción? A quienes no están dispuestos a hacer política en una sociedad pluralista que entiende la democracia como gobierno de la mayoría en el que las minorías tienen un espacio reconocido y respetado.

Uno de los síntomas más preocupantes cómo se ha entronizado el pensamiento simplista de la situación venezolana es la desvinculación progresiva entre ética y política que lleva a no medir ni preguntarse sobre la relación entre medios y fines. Parece como si no importara a nadie la destrucción del país, en todos sus niveles, como consecuencia de las acciones políticas de cada uno de los polos para imponerse sobre el otro⁵.

La mirada internacional sobre Venezuela

Los sucesos de Abril 2002 fueron, entre otras cosas, una muestra de lo que puede ser una confrontación entre polos irreconciliables. Haber recurrido al golpe de Estado⁶ como instrumento para derrotar al *chavismo*, provocó una rápida respuesta internacional de condena de la oposición y apoyo al gobierno de Hugo Chávez, elegido por los votos de la mayoría de los venezolanos. En un primer momento, el gobierno aprovechó esta situación para fortalecer su imagen internacional y acercarse al gobierno de G. W. Bush que lo ha mirado siempre con recelo. Como para la administración Bush la prioridad está puesta en resolver el tema de Irak y combatir el terrorismo internacional, el Gobierno de Hugo Chávez ha tenido que ofrecer garantías totales de mantenerse como seguro suplidor de petróleo, desligarse de sus aliados-amigos radicales del medio oriente (S. Hussein, M. Gaddafi, etc.), renunciar a su relación directa con la guerrilla colombiana para entenderse con el Presidente Alvaro Uribe y admitir el, hasta ahora negado, sobrevuelo de aviones norteamericanos sobre territorio venezolano como parte de la estrategia norteamericana contra el narcotráfico. Estas concesiones llevaron también a la sustitución en la Cancillería venezolana de un "chavista duro" como Luis Alfonso Dávila por un profesional de la diplomacia como Roy Charderton Matos. Al tomar esta posición, el gobierno de Hugo Chávez podía contar

...la mirada internacional estimula el curso de acción *salida institucional*, pues difícilmente un gobierno que emerja de un golpe de Estado o de acciones violentas y no apele a la consulta electoral, podría contar con el reconocimiento de la comunidad interamericana e internacional y correría un alto riesgo de ser objeto de medidas punitivas, tanto políticas, como económicas.

con el apoyo norteamericano al menos hasta la salida de Saddam Hussein del poder en Irak.

Por otra parte, varios países de la Unión Europea han multiplicado sus inversiones en Venezuela desde que se inició el gobierno de Hugo Chávez, posiblemente ocupando el espacio económico dejado por empresarios venezolanos que se sienten amenazados por el chavismo y han preferido sacar sus capitales del país⁷.

En las últimas semanas, especialmente a partir de la importante paralización de la mayor parte de la industria petrolera venezolana, se ha ido produciendo un cambio en la posición norteamericana en relación al gobierno de Chávez, imponiéndose la corriente del Departamento de Estado que lo considera poco confiable políticamente y, ahora, tampoco como suplidor de petróleo. Este cambio se confirma cuando coincide la visita de Thomas Shannon, sub-Secretario Adjunto para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado para apoyar las gestiones de César Gaviria, con un comunicado de la Casa Blanca, leído en Washington por su vocero oficial, en el que se afirma: "Los Estados Unidos están convencidos que el único camino pacífico y políticamente viable para salir de la crisis, es por medio de elecciones adelantadas"⁸, posición luego matizada para identificarse con la resolución 833 de la OEA.

Las naciones latinoamericanas, por su parte, en su mayoría con serios problemas de estabilidad democrática, se inclinan a darle más peso a la "legitimidad de origen" que a la "legitimidad de gestión" de los gobiernos del área, con lo cual el Presidente Chávez cuenta con un apoyo internacional importante, especialmente en aquellos países del Caribe y Centroamérica que forman parte de los convenios petroleros en los que Venezuela es el principal suplidor. Los gobiernos de Brasil y Ecuador, presididos por Luiz Ignacio (Lula) Da Silva, y Ecuador, por Lucio Gutiérrez, con ciertas afinidades ideológico-políticas, por la compleja situación social, económica y política de sus países, no pueden convertirse en las columnas del apoyo internacional del gobierno de Hugo Chávez⁹. Por otra parte, para los Estados Unidos, el régimen de Fidel Castro no representa ninguna preocupación política, como tampoco el eje "Caracas-La Habana".

La Coordinadora Democrática (CD), como rostro de la oposición al gobierno de Hugo Chávez, no tiene todavía una buena imagen internacional. En algunos ambientes, a causa de la presencia de algunas individualidades con claras ambiciones personales, se ve a la CD como un riesgo tan grande como el propio chavismo. Como resultado de los sucesos de Abril 2002 quedó una imagen *golpista* que ha buscado afanosamente sustituir y aparecer comprometida exclusivamente con procesos de cambio que respeten la Constitución de 1999. La estrategia de concentrarse en la búsqueda de una salida electoral y el carácter pacífico de las crecientes manifestaciones de calle, al mismo tiempo que se tienden puentes al chavismo, han rendido frutos en el cambio de la imagen internacional de la oposición en Venezuela. Sin embargo, todavía es vista como un grupo elitesco que no ha logrado ganarse el corazón de las masas populares.

La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha convertido en una referencia importante para lo que sucede en Venezuela. Su Secretario General, con mandato de la organización, lleva más de un mes fijo en Venezuela como facilitador de la Mesa de Negociación y Acuerdos. La calificación que hace la OEA de hechos como la desobediencia de los militares el 22 de Octubre o el acoso a los Medios de Comunicación, tienen un importante impacto en todos los actores políticos que buscan no ser descalificados por este organismo. El Consejo Permanente de la OEA, en una larga discusión, no aceptó una propuesta de resolución del Gobierno venezolano por la que se pretendía obtener un respaldo irrestricto a su carácter legítimo en contra de una acción *golpista* de los opositores y aprobó por consenso la resolución 833 (16 de Diciembre de 2002) que propone, entre otras cosas, "urgir al Gobierno de Venezuela y a la Coordinadora Democrática para que en negociaciones de buena fe alcancen una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos que cuenta con la facilitación del Secretario General de la OEA".

En este sentido, podría concluirse que la mirada internacional estimula el curso de acción *salida institucional*, pues difícil-

Verbalmente todos los actores políticos reconocen a la MNA como el espacio necesario para alcanzar un piso común sobre el cual caminar juntos. Sin embargo, luego de dos meses de su instalación, no se ha logrado más que ratificar esta declaración de intención. Hasta ahora ninguna de las partes ha querido correr el riesgo de afectar su imagen internacional levantándose de la mesa. El único compromiso formal ha sido que la Asamblea Nacional aceptó, el 13 de Diciembre, incluir en la agenda de sus sesiones extraordinarias debatir y darle curso legal a los posibles acuerdos a que se llegue en la MNA.

mente un gobierno que emerja de un golpe de Estado o de acciones violentas y no apele a la consulta electoral, podría contar con el reconocimiento de la comunidad interamericana e internacional y correría un alto riesgo de ser objeto de medidas punitivas, tanto políticas, como económicas.

La Mesa de Negociación y Acuerdos en un contexto radicalizado

Como resultado de una larga gestión de los facilitadores internacionales, el gobierno y la oposición lograron las condiciones para la instalación, el 8 de Noviembre de 2002, de una Mesa de Negociación y Acuerdos (MNA), facilitada personalmente por César Gaviria, Secretario General de la OEA. Hasta la fecha permanece la voluntad de las partes de no levantarse a pesar del escepticismo de una buena parte de la opinión pública en relación a sus posibilidades de éxito, a lo que se suma la turbulencia de las acciones de calle que generan presiones cotidianas sobre sus deliberaciones.

La conformación de la MNA es una señal que tanto en el chavismo¹⁰ como en la oposición¹¹ hay corrientes dispuestas a recorrer el difícil camino de la negociación, aunque persiste la duda de si ambas delegaciones están realmente en capacidad de comprometer al conjunto que, se supone, representan. La delegación del chavismo debe contar con la aprobación explícita del Presidente Hugo Chávez para que los acuerdos que firme sean reales. La delegación de la oposición tiene la difícil tarea de alcanzar unos acuerdos que logren desarmar la visceralidad inmediateista y excluyente de una buena parte de sus seguidores, fortaleciendo una dirección política comprometida con el camino democrático.

Otro desafío de la Mesa de Negociación y Acuerdos es ubicarse en un horizonte que trascienda los intereses directos de las partes como referencia para los acuerdos. En otras palabras, la MNA tiene el desafío de convertirse en un espacio público, representativo de los intereses comunes que hace posible la existencia de la sociedad, trascendiendo los intereses, por legítimos que sean, de las parcialidades sociales o políticas, del gobierno y del propio Estado. Para que no se repita una de las causas de la crisis

del sistema de conciliación de élites y partidos políticos, en ese horizonte común deben estar explícitamente formulados los intereses del sector popular venezolano. Si el sector popular no se percibe realmente incluido tanto en el horizonte de referencia de la negociación como en lo sustantivo de los acuerdos, éstos no servirán como generadores de la legitimidad democrática necesaria para alcanzar la estabilidad política y económica.

Los tres puntos que conforman la agenda para la cual se constituyó la MNA, a saber, búsqueda de una alternativa electoral para superar la crisis política, crear las condiciones para investigar la verdad de lo sucedido en Abril de 2002 y un programa de desarme de la población civil, son, además de necesarios para avanzar hacia la paz, delicados y comprometedores.

Al sentarse a la Mesa de Negociación y Acuerdos las partes están reconociendo que la consulta a los electores, el pueblo soberano, es un ingrediente ineludible de los acuerdos para superar la actual crisis política. Las alternativas constitucionales de consulta electoral son muy amplias¹². En el marco de un acuerdo político, la referencia al pueblo en quien reside la soberanía¹³, tiene amplias posibilidades de encontrar alternativas que si bien no están en la letra de la Constitución de 1999, están en su espíritu y su aprobación vendría de la fuente misma de su legitimidad y legalidad.

El esclarecimiento de los sucesos de Abril de 2002 es un elemento básico y emblemático en el proceso de reconciliación que está en la base de la constitución de una legitimidad democrática sobre la que se funde la estabilidad política y las políticas públicas de desarrollo y superación de la pobreza. Esclarecer estos hechos supone una investigación independiente adelantada por ciudadanos reconocidos por su autoridad moral apoyados en equipos cualificados para averiguaciones de naturaleza compleja como ésta.

El desarme de la población civil es una exigencia no sólo de la necesidad de disminuir la violencia social, evitar una espiral de violencia política y aumentar significativamente la seguridad ciudadana, sino una necesidad para la existencia misma del Estado. El monopolio de la violen-

La visión simplista, aliñada de una emocionalidad que exige inmediatez, al reducir el uso del instrumento electoral a la ratificación o destitución del Presidente lo que hace es posponer la creación de las condiciones para conseguir la estabilidad política, económica y social, ingrediente necesario de la superación pacífica de la crisis actual de Venezuela.

cia legítima es una característica esencial del Estado para lo cual es necesario el control de las armas y de su uso. La oposición tiende a leer esta propuesta exclusivamente como el desarme de los grupos chavistas. Si se toma en serio, el alcance de una medida de esta naturaleza tendría que ir más allá y desarmar a la delincuencia y los portadores de armas ilegales, aunque quieran justificarlas como legítima defensa. El tratamiento a fondo de este tema llevaría a la discusión sobre la concepción y papel de las fuerzas militares y policiales en el Estado democrático que queremos en Venezuela.

La posibilidad de éxito de la MNA está directamente relacionada a su vinculación con el reconocido sustrato democrático de la cultura política venezolana, producto del largo proceso modernizador del siglo XX, en el que se funda la extendida convicción de que es posible resolver los problemas del país por vías pacíficas. La convicción sobre las posibilidades de los caminos democráticos existe tanto en lo referente a la resolución de crisis agudas como la actual, como a las posibilidades de producir las necesarias transformaciones del sistema político. Puede decirse que el pueblo venezolano es pacífico y amante de la paz. Esta característica de la cultura política venezolana se refuerza en este momento con el talante de la comunidad internacional y con las mediaciones concretas de la Organización de Estados Americanos (OEA), Centro Carter, PNUD, etc.

Verbalmente todos los actores políticos reconocen a la MNA como el espacio necesario para alcanzar un piso común sobre el cual caminar juntos. Sin embargo, luego de dos meses de su instalación, no se ha logrado más que ratificar esta declaración de intención. Hasta ahora ninguna de las partes ha querido correr el riesgo de afectar su imagen internacional levantándose de la mesa. El único compromiso formal ha sido que la Asamblea Nacional aceptó, el 13 de Diciembre, incluir en la agenda de sus sesiones extraordinarias debatir y darle curso legal a los posibles acuerdos a que se llegue en la MNA. El facilitador, César Gaviria, ha insistido un día tras otro en que, a pesar de que ninguna de las partes está en capacidad de imponer su posición, no se está aún cerca de alcanzar un acuerdo, pues apenas han empezado a tener un

lenguaje común en la Mesa y han decidido poner por escrito sus posiciones para someterlas al debate entre las partes¹⁴.

Al parecer, ninguna de las partes siente todavía la necesidad de negociar. Ni siquiera coinciden en la forma de nombrar la mesa. Aunque el documento, firmado por las partes, que le dio vida la llama Mesa de Negociación y Acuerdos, todos los voceros del Gobierno y de la corriente chavista la llaman "Mesa de Diálogo"¹⁵. Como la presión de la oposición y de buena parte de la comunidad interamericana ha privilegiado el punto de la consulta electoral, la MNA se ha centrado en él sin que se haya podido avanzar más allá de las posturas iniciales: para la oposición, consulta inmediata, por lo que urge fijar una fecha en el primer trimestre del año 2003¹⁶. Para el chavismo se trata de esperar el momento del referendo revocatorio establecido en la Constitución, a saber Agosto de 2003, mientras se establecen las condiciones para una elección limpia, empezando por la reorganización del Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a la reciente Ley Orgánica del Poder Electoral, para que exista un "árbitro electoral confiable".

La MNA sigue siendo importante para el inmenso número de venezolanos que rechazan categóricamente la *transición dictatorial* y no se encuentran expresados en la opinión de los polos radicalizados. De allí la importancia de apoyar por todos los medios su existencia y fortalecer los puentes entre las partes que puedan contribuir a su avance.

Para que las partes sientan que no hay otro camino hacia la estabilidad política y la recuperación de la legitimidad del sistema que la negociación, es necesaria la "presión" social. También es claro que no toda presión lleva a la negociación sino que puede llevar también a la confrontación como primer paso, probablemente muy violento, y a la instauración de un régimen autoritario del signo de quien sea "vencedor" en ella. Si el punto de partida en Venezuela es la existencia de polos antagónicos, cada uno de los cuales se siente "mayoría" y percibe contar con la fuerza suficiente para derrotar al contrario, sus líderes estarán inclinados a aumentar la presión social para eliminar al contrario y no para negociar con

La consulta electoral tiene su pleno sentido si se logra ubicarla en un horizonte nacional que trascienda las partes en contienda y, al mismo tiempo, incluya sus puntos de vista. Este es el auténtico desafío del proceso de negociación política que se ha iniciado en la MNA con la facilitación de la OEA y una agenda reducida, pero que hay que concebir como un paso importante en el camino de la negociación de un "acuerdo nacional" en cuyo marco puedan realizarse unas elecciones que permitan enrumbar establemente el futuro del país.

él. Desde esta visión la MNA es uno más de los campos de batalla en los que se tiene que vencer y cualquier gesto de acuerdo se interpreta como debilidad, desesperación o inadmisibles "paso atrás". Así, las delegaciones que se sientan a la mesa son voceros de esas posiciones más que propiamente negociadores.

Si bien un paro nacional puede considerarse como un instrumento legítimo de presión, el convocado a partir del 2 de Diciembre de 2002, acogiendo la emotividad de los sectores radicalizados de la oposición y la conveniencia de sectores "resteados", como los militares disidentes congregados en la Plaza Francia, ha corrido el riesgo de servir de presión a la confrontación más que a la negociación. Vale la pena recordar que la convocatoria al paro ha estado asociada a la imagen de la batalla final, paro indefinido, hasta lograr la renuncia inmediata de Hugo Chávez a la Presidencia de la República. En el seno de la Coordinadora Democrática, CTV y Fedecámaras, se tuvo una intensa discusión sobre la conveniencia de convocarlo para el 2 de Diciembre cuando todavía estaba empezando el proceso de negociación en la MNA, constatando, además, que había una buena planificación del paro que incluyera la preparación de la gente para lidiar con sus consecuencias y podría interpretarse como reacción a la actitud provocadora de HCF y el chavismo, convencido de que podría beneficiarse de este paso de la oposición.

A más de cuarenta días del inicio del Paro Cívico Nacional¹⁷, alimentado por los radicalismos de ambos bandos¹⁸, las torpezas del Ejecutivo¹⁹ y el impacto de la reducción al mínimo de la actividad petrolera²⁰, las posiciones no parecen muy distintas a las anteriores²¹. Ha servido, sobre todo, para confirmar en sus posiciones a los que estaban radicalmente convencidos antes del paro del "golpismo" de la oposición o de que Chávez es el problema de Venezuela y su salida de la Presidencia la solución. Ambos polos apuestan al desgaste del otro. A medida que pasan los días a la oposición se le hace cada vez más difícil levantar el paro sin aparecer como derrotados. Confía en que las consecuencias de la paralización petrolera agudizarán la crisis al punto de doblegar al Gobierno. A este punto, las diferencias internas de la oposición se re-

suelven a favor de las posiciones más radicales que presionan para no levantar el paro sin asegurar la reincorporación, sin retaliaciones, de quienes participaron activamente en él, especialmente los de PDVSA, a sus trabajadores, y lograr ponerle fecha a algún tipo de consulta electoral. Por su parte, el chavismo y el Gobierno parecen dispuestos a soportar el tiempo que haga falta y, desde una posición dura, ejecutan un plan para romper el paro, especialmente intentando disminuir los efectos de escasez de combustible para la población.

En este contexto se explica el ambiente de violencia que se percibe en el país y las tensiones que provoca en la vida personal y colectiva, dando pie a una "estrategia del miedo" por parte de los grupos radicalizados que alimentan el terror a represalias en caso de que se imponga en bando contrario. El chavismo juega esta baza en las zonas populares y la oposición no ha sido capaz de transmitir garantías de que no habrá persecuciones.

Consulta electoral ¿para qué?

Para la visión simplista derivada de las posiciones polarizadas radicalizadas la respuesta es obvia: para sacar a Chávez de la Presidencia o para atornillararlo en ella. Sin embargo, desde la perspectiva de la superación de la crisis de legitimidad democrática la respuesta tiene que ser más compleja. Acudir a un instrumento esencialmente participativo y costoso como la consulta electoral supone una finalidad proporcional a la inversión política que ella requiere.

La visión simplista, aliñada de una emocionalidad que exige inmediatez, al reducir el uso del instrumento electoral a la ratificación o destitución del Presidente lo que hace es posponer la creación de las condiciones para conseguir la estabilidad política, económica y social, ingrediente necesario de la superación pacífica de la crisis actual de Venezuela. La falacia, tantas veces repetida de que no puede haber algo peor que HCF en la Presidencia queda desmentida por la experiencia histórica venezolana, latinoamericana y mundial. La sustitución del Gobierno puede ser parte de una solución que logre articular un programa que atienda la complejidad de los problemas del país, pero

En este momento es pertinente la pregunta sobre si una auténtica "salida" no implica la formación de un *gobierno provisional* o *gobierno de unidad nacional*, fruto del acuerdo nacional arriba mencionado tanto en su composición, como en un programa producto de consensos básicos en la política social y económica de corto plazo alineada con el horizonte de largo plazo de un proyecto nacional.

en sí misma no es la solución e, incluso, puede aumentar los problemas. Hace falta repetir hasta la saciedad que el "después" está íntimamente vinculado al modo como se haga y al camino por el que se llegue. Fines y medios no pueden separarse. La ética democrática exige el uso exclusivo de medios democráticos para alcanzar cualquier objetivo político.

La consulta electoral tiene su pleno sentido si se logra ubicarla en un horizonte nacional que trascienda las partes en contienda y, al mismo tiempo, incluya sus puntos de vista. Este es el auténtico desafío del proceso de negociación política que se ha iniciado en la MNA con la facilitación de la OEA y una agenda reducida, pero que hay que concebir como un paso importante en el camino de la negociación de un "acuerdo nacional" en cuyo marco puedan realizarse unas elecciones que permitan enrumbar establemente el futuro del país.

Destranchar el debate sobre la salida electoral implica, entonces, colocar la discusión de la MNA en un horizonte mayor en el que cobren sentido los acuerdos sobre los puntos contenidos en su agenda inicial y éste no es otro que la formulación de una propuesta de acuerdo nacional, con un programa de corto plazo en política social para atender el impacto del empobrecimiento, en política económica para iniciar la salida de la recesión y de fortalecimiento de las Instituciones Públicas para rescatar, simultáneamente, la credibilidad de la ciudadanía en ella y un nivel básico de eficiencia del funcionamiento de los servicios públicos bajo la responsabilidad de los cinco poderes que hoy conforman la organización del Estado venezolano.

La propuesta de acuerdo nacional será aceptada por la población venezolana en la medida en que sea realmente incluyente de todos los sectores sociales y todas las corrientes políticas. Si algún sector social o posición política es efectivamente o se percibe excluida no se conseguirá el piso firme sobre el cual hacer camino hacia una auténtica consulta electoral.

En este momento es pertinente la pregunta sobre si una auténtica "salida" no implica la formación de un *gobierno provisional* o *gobierno de unidad nacional*, fruto del acuerdo nacional arriba mencionado

tanto en su composición, como en un programa producto de consensos básicos en la política social y económica de corto plazo alineada con el horizonte de largo plazo de un proyecto nacional. El modelo de transición entre la dictadura del Gobierno de las Fuerzas Armadas y el Sistema de Conciliación de Élités y Partidos Políticos de Enero de 1958 a Febrero de 1959, constituye una experiencia histórica inspiradora del posible modelo a seguir. En ese momento de nuestra historia política las Fuerzas Armadas, que venían de ser gobierno y algunas corrientes internas deseaban seguirlo siendo, acepta regresar a ser una fuerza garante de un régimen emanado de la voluntad popular y se ocupa de garantizar el orden público, con lo que se logra conjurar la violencia como curso de acción para dirimir los conflictos. Un grupo de personas capaces, sin pretensiones de mantenerse allí una vez concluida la transición se encargó del ejercicio del gobierno provisional y de encabezar las instituciones públicas. Los dos factores anteriores hicieron posible que los políticos de todas las corrientes, con su legítima intención de acceder al gobierno, el parlamento y demás poderes públicos, se dedicaran a consolidar sus programas y organizaciones políticas para competir en las elecciones por el favor de la mayoría popular.

Una transición de esta naturaleza permitiría un necesario proceso de deslindes políticos, hoy ocultos por la polarización radicalizada. La "unidad" que hoy ostenta la oposición está motivada exclusivamente por el objetivo común de expulsar a HCF de la Presidencia de la República. Es una unidad que esconde las contradicciones de las visiones distintas del país existente, incluso incompatibles unas con otras en su interior, que no se han confrontado por el momento de la lucha, pero que tendrán que hacerlo a la hora de encontrar un acuerdo sobre el horizonte de largo plazo y el programa para alcanzarlo. En el chavismo sucede algo análogo. Conviven visiones contradictorias de la transformación que se quiere impulsar, además de la ausencia generalizada de planes consistentes para llevarlas a cabo.

Esta situación explica, entre otras razones, la existencia de una gran cantidad de venezolanos que no se identifican con nin-

Es claro que el escenario confrontador, por el que se avanza hacia la *transición dictatorial*, ha cobrado fuerza en relación a las posibilidades de negociación para una *salida institucional*. El factor que más influye en esa dirección es el deterioro de la ética política que ha llevado a que la palabra no sea más expresión de compromiso coherente, por tanto, que se está dispuesto a respetar la palabra empeñada.

guno de los polos. También explica que muchos de ellos, puestos ante el dilema de uno u otro polo, se vean obligados a ubicarse en una posición en la que no se sienten cómodos porque no están de acuerdo ni consiguen espacio para expresar los matices de su posición. Cada uno de los polos al proclamarse mayoría cuenta manipuladamente entre los suyos a este grupo de venezolanos que realmente no se identifica en ninguno de ellos.

¿Hacia dónde se inclina la balanza?

Es claro que el escenario confrontador, por el que se avanza hacia la *transición dictatorial*, ha cobrado fuerza en relación a las posibilidades de negociación para una *salida institucional*. El factor que más influye en esa dirección es el deterioro de la ética política que ha llevado a que la palabra no sea más expresión de compromiso coherente, por tanto, que se está dispuesto a respetar la palabra empeñada. Peor aún, el engaño y la mentira han llegado a justificarse como instrumentos políticos, así como el recurso a la violencia e incluso la guerra, en sus variadas formas, vaciando el quehacer político de todo sentido y contenido humano. La voz es el vehículo que trasmite la palabra de persona a persona. La palabra humana parte de las entrañas de una persona y quiere llegar a las entrañas de la otra. La voz permite que llegue al oído, pero la palabra es comunicación cuando es entendida por la razón y aceptada en el corazón. La voz sin palabra se convierte en ruido vacío que molesta al oído. La democracia necesita la libertad de expresión no sólo como voces distintas sino como palabra ciudadana que comprometa a los actores en la realización de los sueños comunes. En este momento de Venezuela hay muchas voces, incluso que hablan mucho y muy alto, sin embargo, hay poca palabra²².

También ha ganado terreno en la dinámica polarizante y excluyente otra lamentable distorsión ética, a saber, la que llega a identificar a uno de los bandos con el mal, por tanto, al otro con el bien y saca como consecuencia que cualquier cosa se vale para derrotar al mal, siempre que sea hecho por las fuerzas (bando) del bien. Esta especie de "todo vale" con tal de mantener o lograr el poder político es una pendiente inclinada al autoritarismo y la

dictadura con costos muy altos. De este modo, cada polo radicalizado se siente portador de la libertad y la democracia, percibiendo al otro como fascista, autoritario y dictatorial. No cabe duda de que una evaluación ética de las acciones emprendidas por el chavismo, el gobierno y los distintos actores de la oposición, arrojan notables diferencias entre unas y otras. Los resultados de esa evaluación ético-democrática deben convertirse en un criterio decisivo para la decisión personal de las posiciones a tomar y la elección colectiva de las relaciones sociales en las que queremos vivir.

A esto se une la prevalencia de las visiones más radicales del espectro de opiniones existentes en la sociedad. Entre las corrientes del chavismo²³ se ha impuesto la que representa la tradición marxista de los partidos comunistas marcados por el sello estalinista, según la cual el objetivo de la acción política es alcanzar y ejercer el poder. La vía para obtener el poder puede ser cualquiera, desde el golpe de Estado hasta el triunfo electoral. Una vez adquirido el poder, éste no se pone en juego, sino que se defiende a cualquier costo sin miramientos en los métodos o instrumentos que se usen. En la oposición se va haciendo hegemónico un sentimiento que la hace percibirse no sólo como mayoría, sino como totalidad. Los radicales de la oposición se perciben a sí mismos como la voz de todo el pueblo venezolano, menos uno, HCF. Pretenden, entonces, transformar el movimiento social²⁴ de resistencia al gobierno y al proyecto chavista, en insurrección política con el único objetivo de conseguir la salida inmediata de Hugo Chávez de la Presidencia de la República.

Los primeros días de Enero han agudizado las tensiones entre los polos que propician la confrontación, convencidos ambos de que se inició la batalla final y pueden ganarla. La provocación de incidentes violentos en las marchas ha aumentado, así como el lenguaje de las cabezas visibles que confirman su disposición a llegar hasta las últimas consecuencias sin pararse en los costos que puedan generarse²⁵. El campo educativo se ha convertido también en campo de batalla. Abrir los centros educativos, después del receso de navidad y año nuevo, se convirtió en un punto de honor para el

La apuesta por seguir el curso de la negociación exige mantener abiertas sus posibilidades en el presente, generar las condiciones para conseguir los acuerdos y crear el modo como se va a garantizar su cumplimiento. En todas las fases juega un papel muy importante la comunidad internacional y existe la disposición a que lo siga cumpliendo. Sin embargo, lo más importante es generar las condiciones internas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de manera que todos los actores políticos y sociales puedan moverse con confianza dentro del marco que resulte de la negociación.

chavismo y otro frente de presión para la oposición con consecuencias muy graves para el sistema educativo²⁶. En las acciones de los polos radicalizados se ha borrado la distinción entre el Estado y el Gobierno. El afán de sustituir al gobierno o defenderlo ha llevado a debilitar al Estado, afectando a la población en sus posibilidades de vida, especialmente a los sectores más pobres.

El resultado inmediato más que un aumento de democracia es un nuevo crecimiento de la anomia social²⁷ que se manifiesta a través de un expansivo movimiento de desobediencia generalizada dentro y fuera de las instituciones del Estado. Se trata de una tendencia a la anarquía política cuya consecuencia es que la sociedad masivamente movilizada no obedezca a sus direcciones naturales y actúe cada grupo por su cuenta, con objetivos y métodos propios. La exacerbación de este movimiento llevaría a una situación de anarquía sólo controlable por la acción directa de la Fuerza Armada llamada a restituir algún orden por la fuerza. Una intervención militar de esta naturaleza añade violencia a la anteriormente desatada por la anarquía y termina imponiendo un régimen de mano dura para mantener el orden restituido "a sangre y fuego".

Hasta el momento el gobierno, contando con el apoyo de la FAN, ha enfrentado la resistencia de calle también con movilizaciones de calle²⁸, siguiendo una característica del chavismo desde sus inicios como es mantener a la población adepta en constante movilización. Al mismo tiempo, ha venido sistemáticamente organizando en "círculos" a sus partidarios, la mayoría en organizaciones sociales y un grupo menor en organizaciones típicamente revolucionarias, con entrenamiento en la agitación de masas, amedrentamiento, sabotaje, uso de armas para la expansión o defensa de la revolución.

En ese curso de acción nuevamente la FAN²⁹ se convierte en el actor que inclina la balanza a un lado o al otro. Posiblemente en su interior los jefes militares y la identidad corporativa se sientan perplejos, pues, por una parte, constitucionalmente deben fidelidad al gobierno elegido en comicios reconocidos, aunque se distancien de sus actuaciones y, por la

otra, perciban que en la oposición no existe la unidad programática ni la madurez política para garantizar una mayor estabilidad a la existente.

En este escenario de confrontación, si la FAN se mantiene fiel al gobierno, tendrá que enfrentar la movilización opositora incluso con una fuerte represión, especialmente si se llega a extremos de paralización o conmoción que exijan la declaración de un estado de excepción. Si, por el contrario, la FAN opta por la desobediencia al gobierno tendrá que enfrentar al Presidente, sus aliados, incluyendo, posiblemente, algunas unidades militares y las organizaciones populares que lo apoyen, también a base de una fuerte represión. En resumen, en un escenario de confrontación la FAN se convierte en el árbitro de la situación, obligada a utilizar la represión para imponer el curso de acción que decida.

Desde todo punto de vista vale la pena fortalecer los espacios de negociación para evitar cualquier escenario de confrontación. Reconociendo que en la gestación de los acuerdos negociados el Gobierno tiene la principal responsabilidad, todas las instituciones del Estado están llamadas a ejercer las presiones legales que les competen para que el Presidente Chávez actúe de acuerdo a su condición de Jefe de Estado antes que como representante de una corriente política ideologizada. La Asamblea Nacional tiene aquí la gran responsabilidad de rescatar su función de representar la pluralidad política de la sociedad, convertirse en el ámbito del debate y la negociación política trascendiendo las tácticas de "aplanadora" o "alicate" para producir acuerdos incluyentes con apoyo mayoritario, además de recobrar la eficiencia legislativa y contralora. Para ello, se necesita que líderes o dirigentes políticos del chavismo se decidan a actuar independientemente, convencidos de que su patrimonio político es el compromiso con la transformación del país y no la lealtad o dependencia personal a HCF, "único" líder del proceso. La dirigencia regional y local, junto a los movimientos que los apoyan tiene, también, un importante papel en desmontar los escenarios de confrontación.

Al mismo tiempo, la dirigencia política tiene que convencer a la gente, a las mayorías, de la vinculación que existe entre

...la Iglesia Católica no tiene ningún papel en la disputa sobre el poder político, pues dentro de sus funciones no entra el ejercicio del poder político. No lo posee ni aspira a tenerlo, sin negar que sus actuaciones tengan un indudable influjo en la vida política y social del país. Por consiguiente, no les corresponde a los representantes de la Iglesia Católica establecer alianzas con personas, organizaciones o posiciones ideológicas que forman parte de alguna parcialidad en la polarización existente. Sus responsabilidades se refieren a todos los fieles cristianos, sin distinciones de posición social o cultural, a los cuales se deben completamente. Si en algún momento, la Iglesia Católica, ha producido la percepción o ha realizado acciones fuera de su rol, está llamada a reconocerlo y corregirse.

el camino del acuerdo, en el marco de la Constitución y los procedimientos democráticos, y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida e impulsar un esfuerzo sistemático, concertado, de largo plazo para la superación de la pobreza.

La apuesta por seguir el curso de la negociación exige mantener abiertas sus posibilidades en el presente, generar las condiciones para conseguir los acuerdos y crear el modo como se va a garantizar su cumplimiento. En todas las fases juega un papel muy importante la comunidad internacional y existe la disposición a que lo siga cumpliendo. Sin embargo, lo más importante es generar las condiciones internas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de manera que todos los actores políticos y sociales puedan moverse confiadamente dentro del marco que resulte de la negociación.

¿Tiene la Iglesia Católica algún papel?

La pregunta no es retórica en tiempos de confusión de roles que puede llevar a demandar a personas e instituciones lo que no les corresponde, aumentando la confusión más que aclarando las responsabilidades. La pregunta es especialmente importante en un contexto en el que abunda el uso y el abuso de los símbolos religiosos católicos como apoyo manipulado a posiciones políticas, necesariamente parcializadas o ideologizadas. Una pregunta, además, que se le hace desde diversos sectores de la sociedad, y con intenciones distintas, a la Iglesia, y nos la hacemos dentro de la Iglesia sus miembros.

La Iglesia Católica, es bueno recordarlo una y otra vez, tiene una sola razón de ser: anunciar la Buena Noticia de Jesucristo, Dios encarnado en la historia humana para reconciliarnos entre nosotros y con Él, hacernos hermanos y hermanas, testigos de la vida, la libertad, la justicia y el amor. El Espíritu de Jesús reúne alrededor de esta misión a quienes han aceptado en la fe formar parte de este pueblo de Dios, empeñado en hacer llegar este anuncio y sus consecuencias a todos los rincones de la historia y la geografía humana. La Iglesia Católica se ubica en la única parcela que posee desde que Jesús se encarnó pobre entre los pobres y mira la situación con los ojos de Jesucristo que son los ojos de los pobres de la tierra. De allí

se desprende que la Iglesia Católica no tiene ningún papel en la disputa sobre el poder político, pues dentro de sus funciones no entra el ejercicio del poder político. No lo posee ni aspira a tenerlo, sin negar que sus actuaciones tengan un indudable influjo en la vida política y social del país. Por consiguiente, no les corresponde a los representantes de la Iglesia Católica establecer alianzas con personas, organizaciones o posiciones ideológicas que forman parte de alguna parcialidad en la polarización existente. Sus responsabilidades se refieren a todos los fieles cristianos, sin distinciones de posición social o cultural, a los cuales se deben completamente. Si en algún momento, la Iglesia Católica, ha producido la percepción o ha realizado acciones fuera de su rol, está llamada a reconocerlo y corregirse.

Por consiguiente, la Iglesia Católica no posee ninguna fórmula mejor a la que pueda surgir del diálogo sincero, fundado en el reconocimiento y la reconciliación entre todos los habitantes de esta tierra y la negociación, cimentada en una ética política que ponga el interés común como horizonte de acuerdos realistas en los que se incluya la pluralidad característica del país. Como consecuencia de su misión, la Iglesia Católica está llamada a acompañar a las personas en cada uno de los ámbitos en los que compartimos su vida y simultáneamente insistir, a tiempo y destiempo, en el reconocimiento del otro y en la renuncia absoluta de la guerra o cualquier tipo de violencia como medio para lograr objetivos personales o grupales en la lucha política. Está llamada a rescatar la palabra empeñada como expresión del compromiso real de cada persona y base ética de la vida pública y alentar la búsqueda incansable de soluciones negociadas, civiles y democráticas, es decir, políticas, con participación de todo el pueblo que conforma la sociedad a cuyo servicio están las instituciones públicas que conforman el Estado y tienen la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad política y convivencia social.

En el cumplimiento de su misión la Iglesia tiene que interpelarse a sí misma e interpelar a cada uno de los ciudadanos sobre lo que está dispuesto a dar de sí y de lo suyo para la construcción de lo público, cuánto está dispuesto a ceder de sus posiciones iniciales para construir

17 El Paro Cívico Nacional comenzó, el 2 de diciembre de 2002, débilmente y se fortaleció con la incorporación del sector petrolero. Es muy notoria la paralización del sector industrial y del sector educativo. El comercio va teniendo altibajos según los días y zonas del país. Los servicios con variaciones. El transporte urbano ha funcionado con normalidad y el extraurbano según el acceso al combustible. Se ha alterado notablemente la normalidad de la vida cotidiana y las características de este tiempo de navidad y año nuevo. Comenzó con dos días de paro, de allí paso a ser "paro activo" y a partir del 6 de Diciembre, a raíz de las muertes en la Plaza Francia, tiende a hacerse indefinido hasta que renuncie HCF o se convoquen elecciones inmediatas. El 14 de Diciembre se llevó a cabo en Caracas una marcha múltiple que reunió cientos de miles de personas bajo el slogan "vete ya, ni un paso atrás" que terminó en una inmensa y pacífica concentración en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo. Después de la navidad las movilizaciones han voceado más en petición de elecciones. Llevar el carácter indefinido a sus últimas consecuencias supondría la completa paralización de la industria petrolera con la consiguiente consecuencia para las industrias básicas, el consumo de gas e, incluso, la generación de electricidad. Igualmente supondría la paralización de la banca y otros servicios.

18 Ambos polos, aquejados del "síndrome de la batalla final" han visto en el paro la oportunidad de borrar del mapa político a los golpistas, como se hizo después de Abril en la FAN, especialmente a los infiltrados en PDVSA o quebrarle el espinazo al chavismo sacando a su líder del juego.

19 Además de la reedición del lenguaje provocador de HCF y otros voceros del gobierno, la intervención de la Policía Metropolitana, con dudoso fundamento legal, por parte del Ejecutivo, el uso de militares, el Ejército, no sólo la Guardia Nacional (GN) para el patrullaje de la ciudad de Caracas, la desproporcionada actuación de la GN el segundo día del paro para disolver una pequeña manifestación frente a la sede de PDVSA-Chuao, también para intentar la normalización de la distribución de gasolina, la agresión a los periodistas en la calle, la presencia de grupos de choque de defensa del gobierno en acciones articuladas para amedrentar, e incluso saquear, las plantas de televisión, pelearse espacios públicos (como PDVSA-La Campiña), las posiciones ambiguas frente a las muertes del 6 de Diciembre en la Plaza Francia de Altamira, etc., han avivado las emociones radicalizantes de los polos.

20 La participación activa en el paro de un importante grupo de la nómina mayor de PDVSA, junto con la paralización de la flota de PDV-Marina, apoyada por la Marina Mercante, y grupos de trabajadores ha producido una reducción del 80% de la actividad petrolera, incluyendo la refinación para el mercado interno y el flujo de las exportaciones. La reacción dura del gobierno y el Presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, ha provocado la renuncia de la Junta Directiva, la destitución de altos funcionarios y graves tensiones en toda la corporación.

21 Quizá la mayor diferencia es que se ha abierto paso la posibilidad de un adelanto de las elecciones a través de una enmienda constitucional, como acuerdo en la MNA, aprobada por la Asamblea Nacional y ratificada en referendo, como la vía de consulta electoral que termine siendo aceptada.

22 Un elemento muy polémico en la actual crisis venezolana es el papel de los Medios de Comunicación tanto públicos como privados. Muchos medios se han convertido en voceros de una parcialidad y argumentan su posición. Son varios los comunicadores sociales o medios extranjeros que han manifestado su sorpresa sobre esta situación y su dificultad para encontrar información. El tema es espinoso y no es el espacio adecuado para tratarlo, sin embargo, el análisis, evaluación y conclusiones ampliamente aceptadas sobre el papel de los medios de comunicación social es una de las tareas ineludibles a la hora de diseñar las reglas de juego de la democracia en Venezuela.

23 Cfr. ARVELO, Alberto, *El dilema del chavismo*. Caracas: Centauro Editores, 1998. Las características personalistas del liderazgo de HCF, su concepción concentradora y mesiánica del poder, su incapacidad de adelantar una política coherente de alianzas políticas, su visión centralista del Estado, a lo que se une un equipo de gobierno ineficaz para llevar a la práctica algo de lo prometido, hizo pedazos el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 actor principal del golpe de Estado del 4 de Febrero de 1992 y le enajenaron paulatinamente el apoyo del "chavismo popular y democrático" que lo llevó a los triunfos electorales de 1998, 1999 y 2000.

24 Es importante subrayar la magnitud de la movilización de la sociedad venezolana junto con su carácter pacífico, especialmente de los sectores medios, lo cual representa una novedad política y una esperanza de obtener un fortalecimiento de la ciudadanía como resultado de la actual coyuntura.

25 El impacto en la economía nacional y sus consecuencias sociales –mayor empobrecimiento– como consecuencia de la paralización de actividades es ya muy grande. Al reducirse drásticamente la exportación petrolera posible para el 2003, se verá muy mermado el ingreso del Estado y afectado el conjunto de la economía. El sector privado acusa también grandes pérdidas cuya recuperación llevará mucho tiempo.

26 La tensión entre los radicalismos y la sensatez se pone nuevamente de manifiesto. El pensamiento simplista ve un frente de batalla en donde se juega la posibilidad de aminorar los efectos de la crisis en los niños y jóvenes a través de mantener una cierta normalidad en el calendario escolar, además de evitar las enormes pérdidas que significa no completar los lapsos académicos previstos.

27 Los signos de anomia social aparecieron en Venezuela asociados al proceso de pérdida de legitimidad del sistema de conciliación de élites y partidos políticos. A partir del "caracazo" en 1989 y los golpes militares de 1992 sus signos se hicieron preocupantes. El fenómeno político-electoral Chávez está muy relacionado a que fue percibido como un efectivo dique de los procesos anómicos en la sociedad venezolana.

28 Aunque los discursos de uno y otro polo es que controlan o han recuperado la calle, la realidad indica, más bien, que se han repartido las calles, no sólo en Caracas, sino en una buena parte de las ciudades del país. Los partidarios del gobierno marchan por unas calles y reconcentran en unos sitios distintos a dónde lo hacen los de la oposición. También se han dado pasos de pelearse algunos espacios.

29 El tema militar y policial es uno de los puntos álgidos a la hora de establecer una visión compartida del futuro del país que trascienda las pretensiones de este ensayo, pero que conviene recordar. No cabe duda que la Constitución de 1999 introdujo variantes importantes a la concepción militar de la de 1961, además, la descentralización política, el nuevo Código Procesal Penal, la transformación de la Fiscalía, la Policía Judicial y la aparición de la Defensoría del Pueblo, ha cambiado la faz de la actividad policial. La experiencia de estos años apunta interesantes puntos para esa discusión, clave para garantizar un Estado Democrático estable.